

El colapso del programa de esterilizaciones forzosas del Perú

Por David Morrison

Los representantes del gobierno peruano anunciaron a principios de junio de 1998 el colapso de la controversial y mortífera campaña nacional de esterilización del Ministerio de Salud de ese país. La prensa peruana informó que los funcionarios del gobierno habían declarado que "Las esterilizaciones han disminuido en un 68%". La explicación que se ha dado es que ha habido "una dramática falta de confianza tanto en el método como en los agentes de la salud".

Los oponentes de la campaña de esterilización constituyeron una sorprendente alianza, sin precedentes en la historia del Perú. Grupos de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales feministas, grupos pro vida y de derechos humanos se unieron para oponerse a la campaña antivida y contraria a la libertad. Los grupos presentaron y documentaron numerosos y graves problemas, incluyendo el hecho de que la campaña estaba coaccionando a las mujeres de bajos recursos, que ni siquiera estaba siguiendo las más mínimas pautas de la medicina, y que les había causado la muerte a por lo menos 18 mujeres que habían sido forzadas a someterse a la cirugía.

"Normalmente no soy dado al optimismo público," dijo Steve Mosher, Presidente del Instituto para la Investigación sobre asuntos de Población o PRI (Population Research Institute), "pero en este caso tengo que admitir que las noticias que vienen del Perú merecen una calurosa bienvenida. Hubiera sido bueno oír que el gobierno del Perú se ha dado cuenta de que le había declarado la guerra a su propio pueblo," dijo Mosher. "Pero en cierta forma es aún más alentador escuchar que el colapso de la campaña se debió al rechazo de sus pretendidas víctimas".

El PRI envió un investigador y un equipo de camarógrafos al Perú a finales de enero para documentar los abusos de la campaña. El reportaje del PRI ayudó a generar suficiente interés por parte del Congreso de EE.UU. de tal manera que se obtuvieron audiencias públicas en las cuales se presentaron testigos del Perú.

Jorge Parra, el nuevo director del programa de Paternidad Planificada y de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud del Perú, confesó oficialmente dos cosas devastadoras. Dijo que era "obvio" que el gobierno no iba a lograr alcanzar la "meta" de 78.000 ligaduras de trompas para 1998. Esta fue la primera vez que un funcionario peruano ha admitido que el gobierno había fijado metas anuales para el programa. En segundo lugar, Parra anunció que el

Ministerio había terminado sus "festivales de esterilización", cuya existencia el gobierno había negado previamente.

El PRI y otros grupos de derechos humanos lograron documentar el hecho de que las campañas comenzaron después de que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori obligara a la legislatura peruana a cambiar la ley, de muchos años por cierto, que prohibía el uso de la esterilización o del aborto como medios de "planificación familiar" en el país. Luego, el gobierno comenzó a organizar campañas en las que se empleaba la coacción, utilizando como modelo campañas similares en Colombia y la India. Una de las medidas que tomó fue el utilizar la pericia extranjera, para lo cual trajo a extranjeros para capacitar a funcionarios y médicos peruanos.

Los planes para las campañas comenzaron en Lima, donde los funcionarios usaron criterios económicos y sociales para elegir el sector del Perú que iba a ser sometido a la esterilización. Las áreas elegidas casi siempre eran pobres y pobladas principalmente por peruanos cuyos ancestros eran nativos. Cuando se terminó el plan, el Ministerio avisaría a los funcionarios locales en la región y ellos comenzarían a buscar a las mujeres para ser esterilizadas. Según lo documentado por los críticos, las tácticas que se usaron para lograr que las mujeres aceptaran la esterilización incluyeron los incentivos, el acoso, las amenazas y la intimidación. Los funcionarios frecuentemente ofrecían alimentos y algunas veces ropa a mujeres paupérrimas y a familias que estaban pasado hambre a cambio de la esterilización.

Ninguna de las mujeres que el PRI entrevistó como parte de su investigación, dijo que le habían permitido dar ni siquiera algo parecido al consentimiento informado al procedimiento. El PRI logró documentar casos de mujeres que ya estaban colaborando con el movimiento en pro del control demográfico al consentir que las vacunaran con la Depo-Provera cada tres meses, y que luego les dijeron que las vacunas iban a ser "descontinuadas" y que ahora debían aceptar la esterilización. [Nota del traductor: La inmoral y dañina Depo-Provera funciona también como abortivo.]

Cuando se le preguntó acerca de esta política particular al Dr. Eduardo Yong-Motta, ex Ministro de Salud durante el comienzo de las campañas y actual Consejero Presidencial en asuntos de Salud, éste le respondió al PRI que "la Depo-Provera es muy cara". Luego añadió que al gobierno le preocupaba que las mujeres se "olvidasen" de venir a recibir la vacuna o aún de que decidiesen que no querían recibirlas más.

La oficina de Defensa Pública, que funciona en el Perú como una especie de inspector general oficial, está investigando una creciente lista de acusaciones de abuso contra el gobierno.

Fuente: Este artículo es una traducción resumida del publicado por el autor con el título de "Forced Sterilization Campaign Collapses," en **Human Life International Reports** (julio de 1998): 10.

Esterilización

INICIO

Temas